

COLUMNAS

La Gran Marcha del Retorno

El Ciudadano · 6 de agosto de 2018



El 14 de mayo el mundo despertó consternado por las imágenes de violencia ocurrida en las fronteras efectivas entre **Gaza** e **Israel**. Se trata del día más sangriento en Gaza desde la operación militar israelí Borde Protector (*Protective Edge*) el 2014. Las noticias presentaban un escenario contradictorio: imágenes de violencia y muerte por la Gran Marcha del Retorno (GMR) palestina, y simultáneamente imágenes de satisfacción y victoria por la polémica apertura de la nueva embajada estadounidense en Israel, antes en **Tel Aviv** y ahora en **Jerusalem**.

La GMR es una marcha de protesta civil y resistencia organizada por la sociedad civil palestina en la frontera efectiva entre Gaza e Israel. En la marcha participan niños, madres y padres, abuelos, familias enteras; en resumen, gran parte de la sociedad civil palestina. Sus demandas son, primero, el derecho efectivo al retorno de refugiados palestinos y sus descendientes a las tierras natales de las cuales fueron expulsados; y segundo, el cese del estado de sitio y del bloqueo de tránsito (de personas, bienes, servicios, etcétera) desde y hacia Gaza.

Sólo durante ese 14 de mayo, militares israelíes hirieron a casi 3 mil protestantes palestinos y asesinaron a [59 personas en Gaza](#). Desde el inicio de la GMR el 30 de marzo, el número de asesinados por las fuerzas sionistas asciende a 118 personas, con más de 13 mil heridos (muchísimos han quedado minusválidos), en su gran mayoría por munición pesada y francotiradores según la [Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU](#), declaración del 24 de mayo. Si bien el gran número de heridos y asesinados ha generado consternación internacional debido al uso desproporcionado de fuerza y a que, en su gran mayoría, las víctimas son personas desarmadas, Israel ha justificado los asesinatos y ataques militares afirmando que es defensa legítima contra agentes “terroristas”, especialmente militantes de **Hamas**, partido fundado en 1987 y que actualmente gobierna en Gaza.

La narrativa de Israel corresponde a la continuación de un mito que manipula la realidad para esconderla. En **Palestina** no hay un “conflicto”, si con este término nos referimos a dos bandos en pugna que son de algún modo equiparables. Lo que hay es la *ocupación* militar de un territorio por parte un estado colonial, racista y con poderío nuclear, el cual se ha mantenido impune, agresión tras agresión, gracias al firme respaldo de **Estados Unidos** con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las **Naciones Unidas**, y a la pasividad general de la comunidad internacional.

El discurso sionista tampoco resiste los hechos recientes: mientras los palestinos movilizados exceden con creces a los militantes de Hamas, desde el inicio de la

GMR se cuenta entre los asesinados a 15 niños, quienes sucumbieron en su gran mayoría como blancos de francotiradores (7 de ellos el mismo 14 de mayo). Se trata de niños catalogados como terroristas y, en consecuencia, como blancos legítimos por parte de las autoridades y militares israelíes. También la prensa, enfermeros, paramédicos y médicos han sido blanco de francotiradores, incluso con víctimas fatales. Del otro lado: un soldado israelí fue apuñalado mientras invadía un campo de refugiados palestinos. No se cuentan civiles israelíes muertos ni heridos.

El ataque militar a civiles desarmados, incluyendo niños, y su asesinato son una violación flagrante del derecho internacional y, en este contexto, se constituyen como violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿Por qué decenas de miles de palestinos han decidido protestar y enfrentar la represión sionista? ¿En qué eventos históricos se origina esta protesta?

Nakba: la gran catástrofe palestina

La Resolución 181-II adoptada en 1947 por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece la partición de la Palestina histórica (hasta entonces bajo mandato británico) en dos estados soberanos: un estado Palestino con alrededor del 43% del territorio, y un estado Israelí con 56% del mismo. Pero pronto el plan de la comunidad internacional de coexistencia pacífica dio pie a un proceso de desposesión, expulsión y destrucción de ciudades palestinas por parte de milicias paramilitares israelíes, en lo que fue conocido en círculos israelíes bajo el nombre de “Plan D”.

Hacia el término del mandato británico y el establecimiento oficial del estado de Israel en mayo de 1948, las milicias sionistas ya habían expulsado alrededor de 300 mil refugiados palestinos mediante métodos de terror. Las consecuencias de la guerra árabe-israelí de 1948 (librada entre Israel y una coalición de países árabes (**Siria, Egipto, Líbano, Jordania, Yemen e Irak** entre ellos) fueron

desastrosas para los palestinos: más de 500 pueblos y ciudades fueron quemadas y/o demolidas, y varios miles de civiles exterminados. A inicios de 1949, las milicias sionistas expulsaron alrededor de 750 mil civiles palestinos de sus tierras, esto en ambos territorios divididos por la **ONU**. Con todo esto Israel colonizó alrededor del 80% del territorio y, de paso, truncó el futuro estado palestino hasta el día de hoy.

Este momento de exterminio, desposesión, demolición y expulsión de cientos de miles de palestinos es lo que se conoce como *Nakba* (“catástrofe” en español), que cumple 70 años este 2018.

Respuesta internacional: ambivalente y cómplice

La grave crisis humanitaria desatada ya en el primer año de existencia del estado de Israel convocó a la ONU a idear un plan de resolución, el que tuvo como una de sus preocupaciones principales los cientos de miles de refugiados palestinos. En diciembre de 1948, su Asamblea General adoptó la [Resolución 194](#), que establece que los refugiados palestinos deben poder retornar a sus hogares si así lo desean, así como ser compensados de acuerdo al derecho internacional en caso de pérdida o daños en sus propiedades. La actual movilización por el derecho al retorno del pueblo palestino se encuentra fundamentada en esta Resolución de 1948. Este derecho ha sido reafirmado en varias ocasiones por la comunidad internacional, incluyendo la Resolución 169 de la misma Asamblea General en 1980 y la Resolución 237 de su Consejo de Seguridad en 1967.

Pero en vez de acatar el derecho internacional, Israel ha impedido constantemente el retorno de refugiados palestinos, sobre todo vía *manu militari* y con resultados fatales para quienes lo han intentado, aunque también por vía legislativa a través de múltiples leyes internas desde el mismo año 1948. Por este medio se legalizó, por ejemplo, el traspaso de propiedad y territorios palestinos a los colonos y al estado israelíes.

Ante el desastre humanitario palestino, la comunidad internacional ha sido ambivalente y cómplice del proceder criminal de Israel. Históricamente, Estados Unidos ha sido su gran aliado, otorgándole su apoyo absoluto, con tímidas excepciones bajo los gobiernos de **Jimmy Carter** y **Barack Obama**. La primera potencia mundial le otorga cada año alrededor de US\$ 3 billones, en su mayoría en armamento militar. Más del 50 % de todos los [vetos](#) ejercidos por Estados Unidos en el [Consejo de Seguridad](#) han sido para mantener impune a Israel de resoluciones condenatorias, que van desde asentamientos ilegales hasta violencia militar contra palestinos. La actual administración **Trump** ha adoptado una posición sionista pro-Israel dura y explícita, demostrada tanto con la reubicación de la embajada en Jerusalén (en contra del consenso internacional) así como con la decisión de eliminar la palabra “ocupación” de los reportes oficiales anuales acerca de Palestina.

Históricamente, **Europa** se ha abstenido de votar en el Consejo de Seguridad para resoluciones condenatorias a actos criminales de Israel. Los repetitivos episodios de destrucción masiva en Palestina por fuerzas israelíes, masacres de civiles e incluso bombardeos a hospitales y otras instalaciones humanitarias de la ONU, han llevado a los estados europeos a manifestar preocupación y emitir advertencias diplomáticas a Israel en los últimos años. Sin embargo, ambivalente, Europa no ha hecho más que estrechar sus relaciones con Israel, incluyendo el comercio militar. Por ejemplo, desde 2008, únicamente **Gran Bretaña** ha otorgado licencias para exportar armas a Israel por un monto que asciende los 500 millones de libras esterlinas (armas que, no está de más recordar, son en su abrumadora mayoría utilizadas contra civiles palestinos).

La política del Estado de Israel: colonialismo de asentamiento y de exterminio

La palabra ocupación podrá ser prohibida, incluso borrada del lenguaje oficial de los poderes imperantes, pero sigue siendo la base de la memoria histórica del

pueblo palestino, desde el “Plan D” de 1948 hasta hoy. La crisis humanitaria del pueblo palestino no ha cesado y, muy por el contrario, se ha profundizado durante las últimas décadas. El gran responsable de esto es el estado de Israel y su ideología sionista. La estrategia de Israel respecto a la “cuestión palestina” no ha cambiado mucho desde los días de su fundación hasta hoy. De forma ininterrumpida, Israel ha ocupado y expandido sus asentamientos (ilegales bajo el derecho internacional) en lo que no es sino un programa de largo plazo de colonización del territorio palestino. La política sionista sigue dos principios: primero, obtener el máximo de territorio palestino con el menor número posible de palestinos en el; segundo, concentrar el máximo número de palestinos en el menor espacio posible. Se trata de una política de estado orientada a la colonización activa del territorio palestino, y en la cual la expulsión y desposesión de palestinos y la destrucción de sus hogares es funcional a su reemplazo por casas, edificios, espacios habitacionales (esto es: asentamientos ilegales) para colonos israelíes. Es necesario insistir que todo esto es ejercido y preservado a través de la fuerza militar y la complicidad (pasiva y activa) internacional.

En particular, el estado de sitio en Gaza continúa desde 1993, a pesar de las declaraciones hipócritas del gobierno israelí que aseguran haberse retirado del todo del territorio palestino. Israel mantiene control total del espacio aéreo, costero y naval de Gaza. Cualquier intento de soslayar este control (incluso, por ejemplo, que pescadores palestinos incursionen en esos espacios navales) es enfrentado con fatal fuerza militar. Israel controla también los pocos cruces fronterizos en Gaza, incluido el que limita con **Egipto**. Uno de cada tres habitantes de Gaza en edad laboral se encuentra desempleado, y el agua y la electricidad son bienes escasos y que a veces faltan durante semanas, mientras que los alimentos y medicamentos llegan siempre en cantidades insuficientes. El 2014 un [reporte de la ONU](#) señalaba que, mientras un tercio de la población palestina no tenía el alimento asegurado, en Gaza esta proporción llegaba al 57%.

Igualmente dramática es la situación de atención médica, pues muchos palestinos literalmente fallecen intentando cruzar los controles fronterizos.

Estas son las razones que han hecho una vez más a la sociedad civil palestina desafiar, en resistencia no-violenta, el poderío militar del estado de Israel para demandar, nuevamente, el derecho al retorno. Se trata de un continuo y prolongado esfuerzo de supervivencia y dignidad. Las condiciones actuales en Gaza (económicas, militares, de salud pública y de servicios básicos) forman la base material sobre la cual se levanta una demanda moral que debiera despertar la solidaridad internacional y la empatía en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca son válidas y actuales las palabras de **Nelson Mandela**, que ya hace décadas reconoció la lucha palestina: “la causa Palestina es la cuestión moral más importante de nuestro tiempo”.

Escuchemos entonces la voz de un pueblo que lucha por su libertad y derecho a existir en paz y con dignidad.

Por **Bernardita Eltit**, **Felipe Lagos** y **Daniel Narriás**

Fuente: [El Ciudadano](#)